



SALA REGIONAL DE CHIAPAS

EXPEDIENTE: 1779/23-19-01-3-OT

PARTE ACTORA: **** *

DEMANDADA: JEFA DE SERVICIOS DE ASIGNACIÓN DE DERECHOS DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y CULTURALES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

MAGISTRADA POR MINISTERIO DE LEY:
LIC. ALEJANDRA MARTÍNEZ MARTÍNEZ

SECRETARIO DE ACUERDOS: LIC. JOSÉ FRANCISCO ESPINO HERRERA



SENTENCIA DEFINITIVA

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 15 de marzo de 2024. Estando debidamente integrada la Sala Regional de Chiapas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa por el Magistrado Licenciado **ALBERTO RODRÍGUEZ GARCÍA**, adscrito a la Primera Ponencia a partir del día 16 de marzo de 2020, conforme a lo establecido en los puntos Primero y Cuarto del Acuerdo **G/JGA/33/2020**, dictado el 12 de marzo de 2020, por la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por la Licenciada **LIDIA MARGARITA ROBLERO HERNÁNDEZ**, Magistrada por Ministerio de Ley e Instructora de la Segunda Ponencia, en términos de lo previsto en los puntos 13, 14, 15, 16, Cuarto y Quinto del Acuerdo **G/JGA/33/2020**, dictado el 12 de marzo de 2020, por la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y en su carácter de Presidenta de esta Sala, así como por la Licenciada **ALEJANDRA MARTÍNEZ MARTÍNEZ**, Primera Secretaria de Acuerdos de la Tercera Ponencia, en funciones de Magistrada por Ministerio de Ley, de conformidad con los puntos Segundo y Tercero del Acuerdo **G/JGA/24/2021**, de 13 de mayo de 2021, dictado por la indicada Junta de Gobierno y Administración de este Tribunal, ambas con apoyo en el artículo 48, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ante la presencia

del Secretario de Acuerdos quien da fe, Licenciado **José Francisco Espino Herrera**, con fundamento en los artículos 49, 50 y 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, proceden a resolver en definitiva el presente juicio en los siguientes términos; y,

R E S U L T A N D O

1. Por escrito ingresado en la Oficialía de Partes de esta Sala el **10 de noviembre de 2023**, **** * por propio derecho, demandó la nulidad de la resolución número ***** de fecha **20 de octubre de 2023**, mediante la cual la Jefa de Servicios de Asignación de Derechos de la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al dar respuesta a su escrito de 31 de agosto de 2023, le informa que: *“no es posible anular ninguna petición previa mediante este documento, ya que la anulabilidad de un acto administrativo, sucede cuando infringe el ordenamiento jurídico, al no reunir los requisitos de forma indispensable para alcanzar su fin, provoca indefensión a los interesados o se realiza fuera del tiempo establecido, por tal motivo, este escrito desahoga únicamente su petición de fecha 29 de junio de 2023 y ninguna otra con anterioridad. (...) Razón por la cual resulta improcedente atender su petición, en el sentido de que se aumente su pensión en los términos que expone, toda vez que se ha demostrado que su cuota diaria de pensión fue calculada apropiadamente, misma que le ha sido liquidada en tiempo y forma, según se desprende de la nómina pensionaria de este Instituto; por lo que no existe diferencia o actualización aplicable alguna correspondiente que ajustar a su favor. (...) Finalmente, en el mismo orden de ideas, le comunico que los incrementos aplicables conforme a derecho se otorgan de forma anual y automáticamente, mismo que se reflejan en el pago de las pensiones, por tal motivo se le hace de su conocimiento que la cuota diaria pensionaria que anualmente percibe se encuentra vigente y pagada”*.

2. En acuerdo de 14 de noviembre de 2023, se admitió a trámite la demanda en la vía ordinaria tradicional, así como las pruebas ofrecidas y se ordenó correr traslado a la autoridad enjuiciada para que contestara la demanda dentro del término de ley.

3. Por oficio depositado en la Administración de Correos en Ciudad de México el 26 de enero de 2024 y, recibido en la Oficialía de Partes de esta Sala el 13 de febrero de 2024, la enjuiciada contestó la demanda. Mediante auto de 14 siguiente, se tuvo por contestada la demanda y, se concedió a las partes el término para formular sus respectivos alegatos.

4. Por acuerdo de 14 de marzo de 2024, se declaró cerrada la instrucción del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Esta Sala Regional de Chiapas es competente para dictar sentencia en este asunto, en los términos de los artículos 1, 3, 6, fracción III, 28, fracción I, 29, 30 y 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, en vigor a partir del día 19 siguiente, 9, primer párrafo, fracción III, 12, primer párrafo, fracciones II y VIII, 48, primer párrafo, fracción XIX y 49, primer párrafo, fracción XIX, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de julio de 2020, dado que la

resolución impugnada encuadra en la hipótesis contemplada en la fracción VII del artículo 3, de la Ley Orgánica de este Tribunal, aunado a que el domicilio de la parte actora se ubica dentro de la jurisdicción territorial de esta Sala.

SEGUNDO. La existencia de la resolución impugnada se encuentra acreditada en los términos de los artículos 14 y 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por la exhibición que de la misma hace el actor, la cual fue plenamente reconocida por la autoridad al formular su contestación de demanda.

TERCERO. La parte actora, en el concepto de impugnación **PRIMERO** y a la vez único de la demanda, sostiene lo siguiente:

- La demandada viola el contenido de los artículos 14 y 16 Constitucionales, porque la autoridad señala que incrementó la pensión conforme al contenido del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 8 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al régimen del artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, lo cual es falso, ya que no establece un comparativo en el que se pueda constatar que efectivamente desde que obtuvo la pensión y hasta el año actual su pensión se ha incrementado conforme al índice nacional de precios al consumidor o de acuerdo al incremento que se ha otorgado a los trabajadores activos de la plaza que el actor ocupó.

- La demandada nunca demostró las operaciones aritméticas que se usaron para realizar los incrementos los incrementos a su pensión, sin que la autoridad establezca la motivación que la obliga a aplicar el incremento, ni el monto, ni el factor de porcentaje que vale la fundamentación.

Por su parte, al contestar la demanda, la autoridad demandada sostuvo la legalidad y validez de la resolución impugnada, en los siguientes términos:

I. Respecto de la acción de pago de las diferencias derivadas de los incrementos no efectuados a las cuotas de jubilaciones y pensiones está sujeta a la prescripción, la que opera respecto de las diferencias que correspondan a periodos anteriores de 5 años a la fecha en que se solicitó la rectificación, por lo que este Instituto se habría librado de la obligación reclamada por prescripción y

estaría obligado a responder, en su caso, por las diferencias del ajuste a la pensión hasta por un máximo de 5 años anteriores a la fecha en que la actora presentó su demanda.

II. La pensión del actor le fue otorgada el 16 de diciembre de 2015, por lo que el sistema de incremento de la pensión que le corresponde es el previsto en el artículo 8 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al régimen del artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y ese Instituto ha aplicado los incrementos a la cuota de pensión conforme a derecho, lo que se acredita con los recibos de pago de pensión de la consulta que se realice a la página web <http://issstenet.issste.gob.mx/cgigen222/fglccgi/wa/r/sp aumentos pensión>, los que deben ser valorados como un hecho notorio.

III. Se señalaron los preceptos y razonamientos por los cuales se ha venido incrementando la pensión del actor.

Acorde a los argumentos de la parte actora, se precisa que la litis en el presente asunto se constriñe a dilucidar si la pensión que le fue otorgada a la parte actora a partir del **16 de diciembre de 2015** se incrementó conforme a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente a la fecha de concesión de la pensión, esto es, conforme aumente al incremento que en el año calendario anterior hubiese tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor, con efecto a partir del 1 de enero de cada año o de resultar inferior conforme a los aumentos otorgados de manera general a los tabuladores que contienen los sueldos básicos de los trabajadores en activo y derivado de ello si dichos incrementos se efectuaron de manera correcta en atención a los motivos y fundamentos expresados por la autoridad demandada al emitir la resolución impugnada.

A juicio de esta Sala, los conceptos de impugnación sujetos a estudio son **fundados**, por las siguientes consideraciones:

En folios 11 y 12 de autos, corre agregada la resolución impugnada, a través de la cual la Jefa de Servicios de Asignación de Derechos de la Dirección de prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al dar respuesta al escrito de la parte demandante de fecha 31 de agosto de 2023, le informa que resulta improcedente atender su petición, toda vez que se ha demostrado que su cuota diaria de pensión fue calculada apropiadamente.

De la resolución de trato, también se desprende que es la propia autoridad demandada quien señala que de la concesión de pensión se desprende que con fecha **16 de diciembre de 2015**, se le otorgó una pensión por jubilación en términos del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente a partir del 22 de julio de 2009, que después de la aplicación de los incrementos conforme al citado Reglamento, a la fecha asciende a la cantidad de *****.

Además, indica que el artículo aplicable respecto a los incrementos pensionarios es el artículo 8 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente al momento del otorgamiento de su beneficio pensionario.

Por lo que concluye que el citado Instituto está cubriendo el incremento de su pensión conforme al artículo 8 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al régimen del artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, habiendo aplicado el incremento más benéfico, siendo improcedente la aplicación retroactiva en beneficio de los incrementos que se debieron realizar a su pensión en la misma proporción que se han incrementado los salarios de los trabajadores, porque su cuota de pensión le ha sido pagada de manera adecuada conforme al artículo 8 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al régimen del artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sin que existan cantidades retroactivas por pagar actualizadas, por lo que resulta improcedente su reclamación de pago de diferencias de los incrementos omitidos por el Instituto, ni existan diferencias por pagar por el concepto de aguinaldo.

Lo que la llevó a discernir que el citado Instituto no adeuda ninguna diferencia respecto a incrementos de su cuota pensionaria con fundamento en el artículo 8 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente a partir del 22 de julio de 2009.

Ahora bien, a fin de dilucidar la controversia sujeta a la potestad de esta Sala, es conveniente destacar que se debe considerar que a la parte actora le fue concedida una pensión por jubilación, con número de pensionista ***** a partir del **16 de diciembre de 2015**, lo que se desprende de la concesión de pensión que obra en folio 26 de autos, así como de los comprobantes de pago que aporta a su demanda (folios

17 a 24) y de los argumentos que hace valer en su demanda; por tanto, de esas documentales se advierte que a partir del **16 de diciembre de 2015** le fue otorgada a la hoy parte actora la pensión por jubilación, documentales a las que esta Sala les concede valor probatorio pleno en los términos de los artículos 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por tratarse de documentos públicos; además de que la parte demandada, no produce objeción alguna; por lo que, desde esa fecha la parte enjuiciante adquirió el derecho al beneficio pensionario correspondiente.

Así del análisis al documento que refiere a la formal concesión del derecho pensionario a favor de la parte demandante, se tiene que le fue otorgada la pensión por jubilación en términos del artículo décimo transitorio, fracción II, inciso a), de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente a partir del 1 de abril de 2007, que es del tenor literal siguiente:

“DÉCIMO. A los Trabajadores que no opten por la acreditación de Bonos de Pensión del ISSSTE, se les aplicarán las siguientes modalidades:

II. A partir del primero de enero de dos mil diez:

a) Los Trabajadores que hubieren cotizado treinta años o más y las Trabajadoras que hubieran cotizado veintiocho años o más, tendrán derecho a Pensión por jubilación conforme a la siguiente tabla:

Años	Edad Mínima de Jubilación Trabajadores	Edad Mínima de Jubilación Trabajadoras
2010 y 2011	51	49
2012 y 2013	52	50
2014 y 2015	53	51
2016 y 2017	54	52
2018 y 2019	55	53
2020 y 2021	56	54
2022 y 2023	57	55
2024 y 2025	58	56
2026 y 2027	59	57
2028 en adelante	60	58

La Pensión por jubilación dará derecho al pago de una cantidad equivalente al cien por ciento del sueldo que se define en la fracción IV y su percepción comenzará a partir del día siguiente a aquél en que el Trabajador hubiese disfrutado el último sueldo antes de causar baja,”

Así, el numeral transcrito sostiene que a los trabajadores que no opten por la acreditación de Bonos de Pensión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se les aplicará diversas modalidades, entre ellas, a partir del primero de enero de dos mil diez, a los Trabajadores que hubieren cotizado treinta años o más y las Trabajadoras que hubieran cotizado veintiocho años o más, tendrán derecho a Pensión por jubilación, además dicha pensión dará derecho al pago de una cantidad equivalente al cien por ciento del sueldo que se define en la fracción IV y su percepción comenzará a partir del día siguiente a aquél en que el Trabajador hubiese disfrutado el último sueldo antes de causar baja.

Régimen pensionario cuyas normas reglamentarias se encuentran contenidas en el Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado el 21 de julio de 2009, como se desprende del artículo 1 de dicho cuerpo normativo que establece:

“Artículo 1.- El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar el otorgamiento de las pensiones y prestaciones complementarias a que tienen derecho los trabajadores sujetos al régimen que se establece en el artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2007”.

Por ello, y atendiendo a la época en que la hoy parte impetrante obtuvo el beneficio de la pensión, le resultan aplicables las

disposiciones del reglamento en cita, entre ellas, el artículo 8 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que establece:

"Artículo 8.- La cuantía de las pensiones se aumentará anualmente conforme al incremento que en el año calendario anterior hubiese tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor, con efecto a partir del 1o. de enero de cada año. En caso de que en el año calendario anterior el incremento del Índice Nacional de Precios al Consumidor resulte inferior a los aumentos otorgados de manera general a los tabuladores que contienen los sueldos básicos de los trabajadores en activo, las cuantías de las pensiones se incrementarán en la misma proporción que estos últimos. De no ser posible la identificación del puesto que correspondería al pensionado, partir de la información oficial proporcionada por las dependencias y entidades al 15 de diciembre de cada año, para el incremento que corresponde a la pensión respectiva, se utilizará como criterio el Índice Nacional de Precios al Consumidor del año anterior, publicado en el mes de enero."

El dispositivo legal trasunto, señala que la cuantía de las pensiones se aumentará anualmente conforme al incremento que en el año calendario anterior hubiese tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor, con efecto a partir del 1 de enero de cada año y en caso de que en el año calendario anterior el incremento del Índice Nacional de Precios al Consumidor resulte inferior a los aumentos otorgados de manera general a los tabuladores que contienen los sueldos básicos de los trabajadores en activo, las cuantías de las pensiones se incrementarán en la misma proporción que estos últimos.

Como se observa, la disposición preinserta entraña la racional y congruente intención de preservar el poder adquisitivo de las pensiones, de suerte que el trabajador pudiera mantener un nivel de vida y una posición económica y social, similar a la que disfrutaba cuando aún laboraba y a la que corresponde al personal en activo, por lo que los incrementos relativos habrían de calcularse **con base en el incremento del Índice Nacional de Precios al Consumidor en cada año anterior**.

No obstante, el dispositivo apuntado contempla además la posibilidad de **sopesar si el incremento del aludido índice es inferior a los incrementos de los sueldos básicos de los trabajadores en activo**, en cuyo caso **la cuantía de las pensiones son aumentables en la proporción de tales sueldos**, y esa mecánica evidentemente representa un beneficio irrenunciable a favor del particular, traducible en que el monto de su pensión se aumentaría en la medida más conveniente a sus intereses, ya sea que el incremento mayor fuera el del **Índice Nacional de Precios al Consumidor** o, el **de los sueldos básicos de los trabajadores en activo**, pero esta última hipótesis no significa en forma alguna que se iguale la pensión con el sueldo básico.

Por lo tanto, es procedente la aplicación del artículo 8 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en vigor en el momento en que la hoy actora obtuvo el derecho a la pensión, para calcular los aumentos que debe reflejar dicha pensión, cuestión que inclusive es reconocida por la propia enjuiciada en la resolución impugnada y en la parte relativa de sus argumentos sintetizados en el **punto II**.

Sin embargo, lo ilegal del actuar de la demandada radica en que al momento de atender la petición de la parte actora en sede administrativa, únicamente se limitó a señalar que en cuanto a los cálculos y porcentajes de incrementos que se han aplicado a la pensión, se realizó conforme al artículo 8 de su Reglamento, sin precisar en forma detallada y específica, los Índices Nacionales de Precios al Consumidor empleados,

las fechas de publicación en el Diario Oficial de la Federación, así como las fechas y porcentajes en que ha aumentado el sueldo básico de un trabajador en activo, así como las operaciones aritméticas y cálculos que le han servido para determinar en qué cuantía se incrementaría la pensión y, que el aumento se ha venido pagando conforme al método que más beneficio otorga al pensionado, puesto que no basta con señalar que los cálculos y porcentajes de incrementos que se han aplicado a la pensión de la actora se realizaron conforme a la vigencia y contenido de la norma aplicable, para concluir en la legalidad del acto administrativo, sino que para dar certeza jurídica al particular, éste requiere de la debida fundamentación y motivación, lo que en la especie no se hizo, porque se restringió a mencionar que aplicó el porcentaje de mayor beneficio, pero no especificó si corresponde a Índice Nacional de Precios al Consumidor o al aumento del sueldo básico de un trabajador en activo.

Por lo tanto, no se puede justificar su actuar con base en un método de incremento de pensión que no le corresponde a la parte actora, ni aún bajo el auspicio de la aplicación del principio del mayor beneficio para el pensionado, porque de ser éste el caso, así debió demostrarlo fehacientemente, esto es, que los incrementos de pensión conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor **son mayores** que los que se hubieran obtenido de aplicar los aumentos otorgados a los sueldos básicos de los trabajadores en activo; pero en el caso, la autoridad demandada faltó a su carga probatoria.

Aunado a ello, es de señalar que corresponde al Instituto demandado, la carga de probar que se ha cumplido con lo previsto en el artículo 8º del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en vigor en el momento en que la hoy parte actora obtuvo el derecho a la pensión por jubilación.

Ello es así, porque la determinación de la demandada en la resolución impugnada en cuanto a que los cálculos y porcentajes de incrementos que se han aplicado a la pensión del actor se realizaron conforme a la vigencia y contenido de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de su Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la referida Ley, constituye una afirmación que debe ser probada en términos del artículo 40 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que obliga a las partes que comparecen ante esta instancia jurisdiccional a probar los hechos de los que deriva su derecho, por lo que hace al actor y, sus excepciones en cuanto incumbe al demandado; por lo tanto, si en la especie la autoridad enjuiciada resolvió que ha efectuado los incrementos acorde con lo que establecen esos ordenamientos vigentes a la fecha de concesión de la pensión de la parte actora, está obligada a demostrar esa circunstancia, pues la carga de la prueba recae en la propia autoridad demandada.

Lo antes expuesto, actualiza la hipótesis normativa a que refiere la Jurisprudencia 2a./J. 93/2013 (10a.), visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXII, Julio de 2013, Tomo I, Página 945, que cita:

“PENSIÓN DEL ISSSTE. CARGA DE LA PRUEBA DE SUS INCREMENTOS EN EL JUICIO DE NULIDAD. Acorde con el sistema de distribución de cargas probatorias que rige en el juicio de nulidad, conforme a los artículos 40 y 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, si el actor expone un hecho positivo como apoyo de su pretensión jurídica debe probarlo, pero la autoridad tiene la carga de acreditar los hechos en que sustenta su resolución, cuando el afectado los niegue lisa y llanamente. De esta manera, si en el juicio de nulidad la parte actora sustenta su pretensión (nulidad de resolución expresa o negativa ficta), en el hecho de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado no ha efectuado los incrementos a las pensiones al mismo tiempo y en la misma proporción que a los salarios de los

trabajadores en activo, y el Instituto demandado afirma, en la resolución expresa que da respuesta a la solicitud o en la contestación a la demanda en el juicio de nulidad en que se impugna la negativa ficta, que ha realizado los incrementos correctamente y de acuerdo con el sistema vigente hasta el 4 de enero de 1993, es inconcuso que debe probar los hechos en que motiva el contenido de la resolución expresa o de la que motivó la negativa ficta, específicamente que ha calculado y pagado los incrementos a la pensión jubilatoria correctamente, con apoyo en el artículo 57 de la ley que rigió al citado Instituto hasta la fecha referida, justamente porque en el juicio de nulidad el pensionado actor ha negado que haya sido así, lo que representa una negativa lisa y llana; además, porque es obligación del Instituto realizar los incrementos a las pensiones, lo que debe justificar debidamente.

Contradicción de tesis 107/2013.- Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Séptimo y Décimo Sexto, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito.- 24 de abril de 2013.- Cinco votos; votó con salvedad José Fernando Franco González Salas.- Ponente: Sergio A. Valls Hernández.- Secretario: Luis Javier Guzmán Ramos.

Tesis de jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del quince de mayo del dos mil trece."

De la invocada jurisprudencia, se derivan las siguientes precisiones hechas por ese máximo tribunal:

- ❖ Que la carga de la prueba se define conforme al sistema previsto en los artículos 40 y 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, teniéndose en cuenta los hechos expuestos por las partes.
- ❖ Que el señalamiento de la parte actora de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado no ha efectuado los incrementos al mismo tiempo y en la misma proporción que los salarios de los trabajadores en activo; implica un hecho de naturaleza negativa, por lo que no puede aplicarse la regla contenida en el artículo 40 de la ley en cita, que impone la carga al actor cuando sustenta su pretensión un hecho positivo.
- ❖ Que si el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado señala que ha realizado los incrementos correctamente y en el mismo tiempo y en la misma proporción que el aumento de los sueldos básicos de los trabajadores en activo, conforme al sistema vigente hasta el cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres, aplica el artículo 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en cuyo caso le corresponde la carga de la prueba.
- ❖ Que el instituto debe probar los hechos en que motiva el contenido de la resolución expresa o de la que motivó la negativa ficta, relativos a que ha calculado y pagado los incrementos a la pensión jubilatoria de manera correcta, con apoyo en el artículo 57 de la ley en cita, justamente porque en el juicio de nulidad el pensionado actor ha negado que haya sido así, lo que representa una negativa lisa y llana.
- ❖ Que es obligación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a través del director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, incrementar las pensiones conforme a los sistemas mencionados en el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como en el diverso 57, fracción III, del estatuto orgánico del propio instituto, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de diciembre de dos mil ocho y en vigor a partir del uno de enero de dos mil nueve y que esa obligación debe estar debidamente justificada.

De ahí que, corresponde a la autoridad acreditar que los incrementos realizados a la cuota pensionaria de la parte actora cumplen con las exigencias de ley, esto es, para demostrar su aseveración debió

en principio, acreditar que los incrementos de pensión conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor **son mayores** que los que se hubieran obtenido de aplicar los aumentos otorgados a los sueldos básicos de los trabajadores en activo; ello, porque ese es el punto de partida que permitiría verificar si los incrementos se fueron dando de modo adecuado.

Entonces es contundente que la demandada, para probar que el incremento que ha efectuado a la cuota diaria pensionaria de la parte actora se ha realizado con el método que mayor beneficio le otorga a la pensionada, estaba constreñida a aportar los elementos de convicción idóneos, sobre la realización de los cálculos y operaciones en relación con uno y otro procedimiento que menciona el dispositivo transcrito, para generar de manera fehaciente en este juzgador la convicción de que efectivamente la aplicación del Índice Nacional de Precios al Consumidor le resulta favorable en comparación con los aumentos otorgados a los sueldos básicos de los trabajadores en activo.

De ahí que, resulten insuficientes los recibos de pago que señala como hechos notorios y visibles en la página web del ISSSTE, <http://issstenet.issste.gob.mx/cgigen222/fglccgi/wa/r/sp aumentos pensión>, a que alude la enjuiciada en el **punto II**, parte restante, porque de esa página no se advierte que el instituto demandado haya incrementado la cuota diaria de la parte demandante conforme al incremento que en el año calendario anterior hubiese tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor ni demuestra que ese sea el método de mayor beneficio para la parte accionante.

En esos términos, se insiste, que la autoridad enjuiciada para soportar su aseveración en vía de fundamentos y motivos de la resolución combatida, debió demostrar en forma detallada y específica las fechas de publicación de los Índices Nacionales de Precios al Consumidor y en qué fechas y porcentajes ha aumentado el sueldo básico de un trabajador en activo de la misma categoría que tuvo el actor, así como las operaciones aritméticas y cálculos que le han servido para determinar en qué cuantía se incrementaría la pensión, y que el aumento se ha venido pagando con el método que mayor beneficio otorga al pensionado, pues no basta con realizar simples afirmaciones para dar certeza jurídica al particular.

Para ello, la demandada debió requerir a la dependencia para la cual laboró la parte actora, que dio origen a la pensión de la que goza, las constancias de evolución salarial del puesto laborado, como medio idóneo para realizar los cálculos de los incrementos de la cuantía de la pensión de la accionante, en la misma proporción en que aumenten los sueldos básicos de los trabajadores en activo y de esa forma establecer el método de mayor beneficio.

Por ende, lo resuelto por la autoridad demandada en la resolución impugnada, además de resultar ilegal, como se dijo porque no satisfizo los requisitos de fundamentación y motivación que todo acto administrativo debe reunir conforme a lo previsto en el artículo 3, fracción V, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, es insuficiente para acreditar que la cuantía de la cuota diaria de pensión de la parte actora se ha incrementado conforme al método que mayor beneficio otorga al pensionado, esto es, en la misma proporción en que aumenten los sueldos básicos de los trabajadores en activo o bien, conforme al incremento que en el año calendario anterior hubiese tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor, con efectos a partir del día primero del mes de enero de cada año, y, por ende, deba desestimarse el argumento identificado con el **punto III**.

Ahora bien, es importante precisar que, como lo puntualiza la demandada en los argumentos marcados con el **punto I**, conforme a lo dispuesto en el artículo 248 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente al momento de la concesión de la pensión, que dispone: *"El derecho a la Pensión es imprescriptible. Las Pensiones caídas y cualquier prestación en dinero a cargo del Instituto que no se reclame dentro de los cinco años siguientes a la fecha en que hubieren sido exigibles, prescribirán a favor del Instituto"*, se obtiene que el derecho de la parte actora para reclamar alguna prestación en dinero a cargo del Instituto prescribe dentro de los cinco años siguientes a la fecha en que hubieran sido exigibles.

En ese tenor, si bien nuestro máximo Tribunal emitió la jurisprudencia con rubro y texto siguiente:

"PENSIONES Y JUBILACIONES DEL ISSSTE. EL DERECHO PARA RECLAMAR SUS INCREMENTOS Y LAS DIFERENCIAS QUE DE ELLOS RESULTEN, ES IMPRESCRIPTIBLE". Conforme al artículo 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el 31 de marzo de 2007 (cuyo contenido sustancial reproduce el numeral 248 de la ley relativa vigente) es imprescriptible el derecho a la jubilación y a la pensión, dado que su función esencial es permitir la subsistencia de los trabajadores o sus beneficiarios. En esa virtud, también es imprescriptible el derecho para reclamar los incrementos y las diferencias que resulten de éstos. Bajo este tenor, tal derecho no se encuentra ubicado en ninguno de los supuestos sujetos a prescripción del numeral en comento, sino en la hipótesis general de que el derecho a la jubilación y a la pensión es imprescriptible, porque dichas diferencias derivan directa e inmediatamente de esos derechos otorgados al pensionado y cumplen la misma función." Novena Época. Registro: 166335. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, septiembre de 2009. Materia: administrativa. Tesis 2a./J. 114/2009. Página 644.

De cuya transcripción se advierte que se ha establecido que el derecho a la jubilación y a la pensión es imprescriptible dado que su función esencial es permitir la subsistencia de los trabajadores o sus beneficiarios y en esa virtud, también es imprescriptible el derecho para

reclamar los incrementos y las diferencias que resulten de éstos, ya que éstas derivan directa e inmediatamente de los derechos otorgados al pensionado y cumplen la misma función, lo cierto es que en diverso criterio de esa Segunda Sala con rubro y texto siguiente:

Décima Época. Registro digital: 2010159.

Instancia: Segunda Sala.

Tipo de Tesis: Aislada.

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,

Libro 23, Tomo II, octubre de 2015.

Materia: constitucional.

Tesis 2a. CIV/2015 (10a.).

Página 2091 «y en el Semanario Judicial de la Federación del 9 de octubre de 2015 a las 11:00 horas».

PENSIONES Y JUBILACIONES DEL ISSSTE. EL DERECHO PARA RECLAMAR SUS INCREMENTOS Y LAS DIFERENCIAS QUE DE ELLOS RESULTEN, ES IMPRESCRIPTIBLE. ALCANCES DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 114/2009 (*).

-En la citada jurisprudencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que es imprescriptible el derecho para reclamar los incrementos y las diferencias que resulten de éstos. No obstante, tal imprescriptibilidad excluye a los montos vencidos de dichas diferencias, los cuales corresponden a cantidades que se generaron en un momento determinado y que no se cobraron cuando fueron exigibles, por lo que la acción para exigir las diferencias vencidas sí está sujeta a la prescripción de cinco años contados a partir de que fueron exigibles, en términos del artículo 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete (cuyo contenido sustancial reproducen los numerales 61 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se Expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 248 de la ley relativa vigente). Luego, el alcance de la citada jurisprudencia es establecer que aunque esté prescrita la acción para reclamar determinadas diferencias, ello no implica la prescripción del derecho del pensionado para demandar los incrementos y las demás diferencias resultantes, por los montos vencidos respecto de los cuales no se actualice la prescripción."

Conforme a la cual, se precisó el alcance de la jurisprudencia antes reproducida, **en el sentido de que la imprescriptibilidad excluye a los montos vencidos de dichas diferencias, los cuales corresponden a cantidades que se generaron en un momento determinado y que no se cobraron cuando fueron exigibles**, por lo que la acción para exigir las diferencias vencidas sí está sujeta a la prescripción de cinco años contados a partir de que fueron exigibles, en términos del artículo 248 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores

del Estado vigente.

También es aplicable al caso, la tesis XVI.10.A. J/30 (10a.), cuyo rubro y texto es el siguiente:

“Época: Décima Época
Registro: 2012257
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV
Materia(s): Laboral
Tesis: XVI.10.A. J/30 (10a.)
Página: 2360

JUBILACIONES Y PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE PAGO DE LAS DIFERENCIAS DERIVADAS DE LOS INCREMENTOS NO EFECTUADOS A LA CUOTA RELATIVA, OPERA RESPECTO DE LAS QUE CORRESPONDEN A PERIODOS ANTERIORES A CINCO AÑOS A LA FECHA EN QUE SE SOLICITÓ LA RECTIFICACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007). La imprescriptibilidad del derecho para demandar las diferencias de jubilaciones y pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es inaplicable para reclamar los montos caídos o vencidos de dichas diferencias, pues su incorrecta integración es un acto de tracto sucesivo que comienza día con día, mientras no se rectifique, en términos del artículo 186 de la ley de dicho organismo, vigente hasta el 31 de marzo de 2007, actualmente abrogada y de la tesis 2a. CIV/2015, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 23, Tomo II, octubre de 2015, página 2091 y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 9 de octubre de 2015 a las 11:00 horas, de título y subtítulo: "PENSIONES Y JUBILACIONES DEL ISSSTE. EL DERECHO PARA RECLAMAR SUS INCREMENTOS Y LAS DIFERENCIAS QUE DE ELLOS RESULTEN, ES IMPRESCRIPTIBLE. ALCANCES DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 114/2009 (*)", en virtud de que esas cantidades se generaron en un momento determinado y no se cobraron a partir de la fecha cierta en que fueron exigibles. Por tanto, la prescripción de la acción de pago de las diferencias derivadas de los incrementos no efectuados a las cuotas de jubilaciones y pensiones, opera respecto de las que corresponden a periodos anteriores a cinco años a la fecha en que se solicitó la rectificación.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.

Amparo directo 12/2016. Marcelo Castañeda Castañeda. 31 de marzo de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretaria: Esthela Guadalupe Arredondo González.

Amparo directo 66/2016. Roberto Castañeda González. 7 de abril de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretaria: Silvia Vidal Vidal.

Amparo directo 73/2016. Jorge González Villegas. 14 de abril de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretaria: Silvia Vidal Vidal.

Amparo directo 85/2016. Jesús Ramos Trejo. 21 de abril de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Villanueva Chávez. Secretario: Misael Esteban López Sandoval.

Amparo directo 89/2016. 28 de abril de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Villanueva Chávez. Secretario: Juan Carlos Nava Garnica.

Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 340/2016, pendiente de resolverse por la Segunda Sala.

Esta tesis se publicó el viernes 12 de agosto de 2016 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 15 de agosto de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013."

En consecuencia, en el caso al solicitarse por la parte actora el pago de las diferencias por los incrementos que le corresponden, ese derecho de estimarse procedente únicamente es respecto de aquellos que no estén prescritos.

Por lo que el reconocimiento del derecho de la parte actora respecto al incremento de su pensión y el pago de las diferencias resultantes que un momento pudieran resultar conforme a la ley vigente al momento del otorgamiento de ese derecho está sujeto al plazo de prescripción que se establece en el artículo 248 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, **de ahí que el derecho a obtener el pago de diferencias por el incremento solicitado es únicamente respecto de los cinco años anteriores a la fecha de petición.**

Similar criterio se sostuvo en la ejecutoria de seis de octubre de dos mil dieciséis dictada en el juicio de amparo directo número *** del Tribunal Colegiado en Materia administrativa del Vigésimo Circuito, al limitar el referido plazo de 5 años para que opere la figura de la prescripción.**

Asimismo, tratándose de la prescripción relativa a las

prestaciones en dinero que se reclaman previstas en el artículo 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, similar en redacción al artículo 248 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente, se ha determinado por parte de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al aprobar la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 55/2009, cuyo rubro dispone:

"Época: Novena Época
Registro: 167221
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXIX, Mayo de 2009
Materia(s): Laboral
Tesis: 2a./J. 55/2009
Página: 241

PENSIONES CAÍDAS, INDEMNIZACIONES GLOBALES Y CUALQUIER PRESTACIÓN EN DINERO A CARGO DEL ISSSTE. LA FALTA DE LA NOTIFICACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 186 DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007, NO INTERRUMPE EL PLAZO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE AQUÉLLAS. El precepto referido establece que las pensiones caídas, las indemnizaciones globales y cualquier prestación en dinero a cargo del Instituto, entre las cuales se encuentran las aportaciones que no se reclamen dentro de los 5 años siguientes a la fecha en que hubieren sido exigibles prescribirán a favor del Instituto y prevé la obligación a su cargo de apercibir a los trabajadores, mediante notificación personal, sobre la fecha de la prescripción, cuando menos con 6 meses de anticipación. Ahora bien, la interpretación gramatical de dicho precepto revela que la obligación impuesta al Instituto consiste en realizar un apercibimiento que debe entenderse como una advertencia a determinada persona, de las consecuencias desfavorables que podrá acarrearle la realización de ciertos actos u omisiones, en el caso concreto, de que está por actualizarse un supuesto legal específico como lo es la prescripción del derecho a cobrar las prestaciones económicas a su favor. En ese sentido, al no tratarse aquella obligación de un presupuesto para que se actualice dicha figura jurídica, sino de un acto concomitante e independiente, no puede tener el alcance de impedir la actualización de la figura jurídica mencionada y, por ende, tampoco puede interrumpir el plazo prescriptivo de referencia.

Contradicción de tesis 62/2009. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, el Segundo Tribunal

Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito. 22 de abril de 2009. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Huerta Martínez.

Tesis de jurisprudencia 55/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del seis de mayo de dos mil nueve."

Las consideraciones anteriores revelan que tratándose de las prestaciones en dinero, **incluidas las diferencias generadas por incrementos a las prestaciones adicionales**, no admiten la posibilidad de que se interrumpa el plazo de prescripción por la falta de aviso al beneficiario, ya que la intención del legislador federal cuando redactó la ley secundaria no era incluir la posibilidad de la interrupción, con relación a la obligación del Instituto hacia los beneficiados, como sí lo hizo para exigir el cobro de los créditos respecto de los cuales tuviera el carácter de acreedor.

Asimismo, no pasa inadvertido para esta Juzgadora la existencia de la Jurisprudencia 2a./J. 10/2021 (11a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación visible en el Semanario Judicial de la Federación, 11 Época con registro digital 2023746, rubro y texto:

"INCREMENTOS DE LA PENSIÓN OTORGADA POR EL ISSSTE. ALCANCE DEL ARTÍCULO 57, FRACCIÓN I, INCISO C, ÚLTIMA PARTE DEL PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CUANDO SON PAGADOS INCORRECTAMENTE EN BENEFICIO DEL PENSIONADO, POR NO SER COMPATIBLES CON EL RÉGIMEN QUE LE CORRESPONDE.

Hechos: Los Tribunales Colegiados contendientes llegaron a conclusiones contrarias al analizar si, en cumplimiento a una sentencia de nulidad, procede que la autoridad demandada modifique los incrementos de la pensión otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado, cuando fueron pagados incorrectamente en beneficio del pensionado, por no ser compatibles con el régimen que le corresponde.

Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte decidió que el alcance de la porción normativa contenida en la parte final del artículo 57, fracción I, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo debe ser en el sentido de que sí procede que la autoridad demandada modifique aquellos porcentajes aplicados incorrectamente en beneficio del jubilado, por no ser compatibles con el sistema de incremento que por ley le corresponde.

Justificación: Esto es así, porque si bien es cierto, conforme a la porción normativa contenida en la parte final del referido artículo 57, por regla general el nuevo acto administrativo no puede perjudicar más al actor que la resolución anulada, sin embargo, de acuerdo a lo establecido en los artículos 50 y 52, fracción V, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para que se condene al cumplimiento de una obligación, primero se debe reconocer la existencia de un derecho subjetivo. Ello se traduce en el sentido de que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo no podría reconocer como derecho del jubilado un beneficio propiciado por un error del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que la propia ley ni siquiera contempla. Lo anterior, porque los

incrementos que se deben aplicar a la cuota de pensión deben ser exclusivamente aquellos que resulten acordes al sistema de incremento que por ley le corresponda al jubilado cuando obtuvo el derecho a ser beneficiario de su pensión, precisamente por ser los que se incorporaron a su esfera jurídica de derechos al momento en que adquirió ese carácter. Lo cual, además, de acuerdo con la contradicción de tesis 342/2016, de esta Segunda Sala, no solamente constituye un derecho del jubilado sino también del organismo de seguridad quien debe atender el sistema de incremento de la pensión conforme a la modalidad que legalmente le corresponda al beneficiario. De ahí que no es posible aplicar cualquier otro parámetro diferente al que legalmente le corresponda al jubilado, en tanto que ello generaría un perjuicio a la esfera jurídica y patrimonio del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, máxime si se toma en consideración que las pensiones y su evolución derivada de los incrementos que se le aplican son progresivas. Lo cual implica que si se mantiene un porcentaje de incremento aplicado incorrectamente, ello tendrá necesariamente en el futuro una repercusión negativa en perjuicio del patrimonio de dicho organismo, precisamente al estar viciado su cálculo desde el origen. Lo anterior, en el entendido que en ningún caso el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado podrá descontar de las modificaciones realizadas el excedente de la cantidad pagada a favor del pensionado con motivo de la aplicación incorrecta de los porcentajes de incremento que aquél realizó. Esto debido a que no existe fundamento alguno que lo faculte para realizar los descuentos a la pensión en dicho supuesto.

SEGUNDA SALA

Contradicción de tesis 70/2021. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Décimo Tercero en Materia Administrativa del Primer Circuito y Segundo en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito. 11 de agosto de 2021. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales, José Fernando Franco González Salas, Javier Laynez Potisek y Yasmín Esquivel Mossa; Luis María Aguilar Morales manifestó que formularía voto concurrente. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Oscar Vázquez Moreno.

Criterios contendientes:

El sustentado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal 300/2020; y el diverso sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal 40/2020.

Nota: La parte conducente de la sentencia relativa a la contradicción de tesis 342/2016 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 7 de abril de 2017 a las 10:11 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 41, Tomo I, abril de 2017, página 907, con número de registro digital: 27055.

Tesis de jurisprudencia 10/2021 (11a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada a distancia de tres de marzo de dos mil veintiuno.

Esta tesis se publicó el viernes 05 de noviembre de 2021 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 08 de noviembre de 2021, para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021.

Transcripción de la que se advierte que nuestro Máximo Tribunal definió que tratándose de los incrementos que se deben aplicar a la cuota de pensión éstos deben ser exclusivamente aquellos que resulten acordes al sistema de incremento que por ley le corresponda al jubilado cuando obtuvo el derecho a ser beneficiario de su pensión, precisamente por ser los que se incorporaron a su esfera jurídica de

derechos al momento en que adquirió ese carácter, por lo que no es solamente un derecho del jubilado sino también del organismo de seguridad quien debe atender el sistema de incremento de la pensión conforme a la modalidad que legalmente le corresponda al beneficiario.

Por lo tanto conforme a dicha Jurisprudencia, la autoridad al cumplimentar el presente fallo no puede aplicar cualquier otro parámetro diferente al que legalmente le corresponda al jubilado, en tanto que ello generaría un perjuicio a la esfera jurídica y patrimonio del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, máxime si se toma en consideración que las pensiones y su evolución derivada de los incrementos que se le aplican son progresivas. Lo cual implica que si se mantiene un porcentaje de incremento aplicado incorrectamente, ello tendrá necesariamente en el futuro una repercusión negativa en perjuicio del patrimonio de dicho organismo, precisamente al estar viciado su cálculo desde el origen.

Lo anterior, en el entendido que en ningún caso el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado podrá descontar, de ser el caso, de las modificaciones realizadas el excedente de la cantidad pagada a favor del pensionado con motivo de la aplicación incorrecta de los porcentajes de incremento que aquél realizó.

Entonces, al evidenciarse la insuficiente fundamentación y motivación de la resolución impugnada, se actualiza la causal de ilegalidad establecida en la fracción II del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo tanto, se impone declarar su nulidad con apoyo en el diverso 52, fracción IV, del mismo ordenamiento, para el efecto de que la autoridad demandada o la unidad competente, emita una nueva resolución debidamente fundada y motivada, en la que describa las fechas y porcentajes de aumento de la pensión de la parte actora, el cual debe ser conforme al incremento que

en el año calendario anterior hubiese tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor, y en caso de que éste resulte inferior a los aumentos otorgados a los sueldos básicos de los trabajadores en activo, la cuantía de la pensión del demandante deberá ser incrementada en la misma proporción en que aumentan los sueldos básicos de los trabajadores en activo, también deberá expresar los cálculos y las operaciones aritméticas que sirvieron para determinar los incrementos de la pensión y cuándo se hicieron, cuidando de no exceder el límite equivalente a diez veces el salario mínimo general, lo que dicho sea de paso se debe regir por los numerales 6, 7, 8 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio por el que se expide la Ley del ISSSTE publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de julio de 2009, observando lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 30/2021 respecto a la forma de cuantificar el monto de la pensión con base en la Unidad de Medida y Actualización al definir que el concepto de salario mínimo establecido en el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado debe entenderse a la Nueva Unidad de Cuenta, así como lo dispuesto en la Jurisprudencia 2a./J. 10/2021 (11a.), y de resultar cantidades por diferencias a favor de la enjuiciante deberán pagársele, **las cuales deberán encontrarse actualizadas en términos del artículo 6, fracción II, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.**

Similar criterio se sostuvo al emitir las sentencias de fechas 27 de febrero de 2019, 19 de agosto de 2019, 19 de agosto de 2019, en autos de los juicios de nulidad ***** , ***** y ***** , respectivamente, del índice de esta Sala Regional de Chiapas.

Cabe acotar que la nulidad decretada, obedece al hecho de que la resolución controvertida, se relaciona con una petición formulada por un particular que no puede quedar desatendida. Al efecto viene al caso la Jurisprudencia por Contradicción de Tesis número 2a./J. 52/2001, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Noviembre de 2001, página 32, que señala:

“COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. LA NULIDAD DECRETADA POR NO HABERLA FUNDADO NO PUEDE SER PARA EFECTOS, EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA RECAIGA A UNA PETICIÓN, INSTANCIA O RECURSO.- Si la ausencia de fundamentación de la competencia de la autoridad administrativa que emite el acto o resolución materia del juicio de nulidad correspondiente, incide directamente sobre la validez del acto impugnado y, por ende, sobre los efectos que éste puede producir en la esfera jurídica del gobernado, es inconcuso que esa omisión impide al juzgador pronunciarse sobre los efectos o consecuencias del acto o resolución impugnados y lo obliga a declarar la nulidad de éstos en su integridad, puesto que al darle efectos a esa nulidad, desconociéndose si la autoridad demandada tiene o no facultades para modificar la situación jurídica existente, afectando la esfera del particular, podría obligarse a un órgano incompetente a dictar un nuevo acto o resolución que el gobernado tendría que combatir nuevamente, lo que provocaría un retraso en la impartición de justicia. No obsta a lo anterior el hecho de que si la autoridad está efectivamente facultada para dictar o emitir el acto de que se trate, pueda subsanar su omisión; además, en aquellos casos en los que la resolución impugnada se haya emitido en respuesta a una petición formulada por el particular, o bien, se haya dictado para resolver una instancia o recurso, la sentencia de nulidad deberá ordenar el dictado de una nueva, aunque dicho efecto sólo tuviera como consecuencia el que la autoridad demandada se declare incompetente, pues de otra manera se dejarían sin resolver dichas peticiones, instancias o recursos, lo que contravendría el principio de seguridad jurídica contenido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

También se invoca por analogía, la tesis de Jurisprudencia número I.4o.A. J/19, del Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, Tomo XVII, Enero de 2003, localizable en la página 1665, que es del tenor siguiente:

“NULIDAD PARA EFECTOS PREVISTA EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SUPUESTOS Y CONSECUENCIAS.- Cuando la ilicitud casada en un juicio contencioso administrativo corresponde a las hipótesis previstas en las fracciones II y III del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, se debe decretar la nulidad para efectos, conforme al artículo 239, fracción III, del propio código, en razón de suceder o darse ilicitudes derivadas de vicios de carácter formal que contrarían el principio de legalidad. Efectivamente, la fracción II del

artículo citado en primer término se refiere a la omisión de formalidades propias o inherentes a la resolución administrativa impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación y motivación, en tanto que su fracción III contempla los vicios en el procedimiento del cual derivó dicha resolución, los que pueden implicar también la omisión de formalidades establecidas en las leyes, violatorias de la garantía de legalidad, pero que se actualizaron en el procedimiento, es decir, en los antecedentes o presupuestos de la resolución impugnada. En tales casos, que contemplan violaciones de carácter formal, la nulidad debe ser tan sólo para los efectos de enmendar o corregir los supuestos de ilicitud en que se hubiese incurrido, por ser apenas el modo, expresión o apariencia, el cómo de la voluntad de la administración expresada en el acto administrativo respectivo, es decir, es el medio a través del cual se prepara y exterioriza la voluntad administrativa."

Para lo anterior, se indica a la demandada que deberá estarse a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en cuanto al plazo para la emisión del cumplimiento de esta sentencia en el entendido de que esta Sala procederá de ser necesario a agotar el procedimiento regulado en la fracción I, del diverso numeral 58 de dicho ordenamiento, con el objeto de asegurar el pleno cumplimiento de esta sentencia.

Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 49, 50, 51, fracción II, y 52, fracción IV y segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se resuelve:

I. La parte actora **probó parcialmente** los extremos de su pretensión.

II. **SE DECLARA LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA** descrita en el resultando 1º de esta sentencia, por los motivos, fundamentos y **para los efectos** precisados en los Considerandos Tercero y Cuarto de este fallo.

III. NOTIFÍQUESE POR BOLETÍN JURISDICCIONAL A LAS PARTES.

Así lo resolvieron y firman el Magistrado y las Primeras Secretarías de Acuerdos en funciones de Magistradas por Ministerio de Ley, que integran la Sala Regional de Chiapas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ante la presencia del Secretario de Acuerdos, quien da fe.

AMM*macs

MAG. ALBERTO RODRIGUEZ GARCÍA.

Magistrado Instructor de la Primera Ponencia

LIC. ALEJANDRA MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Magistrada por Ministerio de Ley e Instructora de la Tercera Ponencia.

LIC. LIDIA MARGARITA ROBLERO HERNÁNDEZ

Magistrada por Ministerio de Ley, Instructora de la Segunda Ponencia y Presidenta de la Sala

Lic. José Francisco Espino Herrera

Secretario de Acuerdos

El **23 de octubre de 2024**, la Licenciada Ana Laura Peña Martínez, Secretaria de acuerdos con adscripción en la Sala Regional de Chiapas, hago constar y certifico que en términos de lo previsto en los artículos 108, 113, fracciones I, II y III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta versión pública suprime toda aquella información considerada legalmente como confidencial, por tratarse de datos de la parte actora, su representante legal, datos de la resolución impugnada y del acto que le da origen y del instrumento notarial. Conste

